

DERECHA Y DEMOCRACIA EN EL CAMBIO POLÍTICO MEXICANO: 1982-1988

SOLEDAD LOAEZA¹

ENTRE 1982 Y 1988 una severísima crisis económica se sumó a tendencias sociales de largo plazo para dar lugar a cambios significativos en el régimen político mexicano. El más llamativo de ellos, aunque no necesariamente el más importante, fue el notable debilitamiento electoral del partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional. En ese terreno, el PRI enfrentó en esos años intensos desafíos en algunas zonas del país, que pusieron en juego el virtual monopolio que ejercía desde 1929. La culminación de este cambio fue la disputada elección presidencial de julio de 1988, en la que el candidato priísta a duras penas obtuvo la mayoría frente a sus dos contendientes más cercanos, cuyos votos sumados alcanzaron casi 50% del resultado total.

El gobierno del presidente Miguel de la Madrid había debutado el 1 de diciembre de 1982 bajo el signo de una crisis política asociada con el desprestigio del gobierno saliente y las perspectivas de deterioro económico. Las inconformidades y las protestas se expresaron fundamentalmente en una insurrección electoral. Esto es, en un considerable aumento de la participación independiente en numerosos comicios que se celebraron en distintos estados de la república durante el sexenio, varios de ellos de gran importancia económica como Chihuahua y Sonora. Este movimiento electoral favoreció especialmente al Partido Acción Nacional, PAN.

La movilización de los votantes fue sin duda perturbadora para un régimen que históricamente había hecho de la no participación uno de los pilares de su permanencia. Sin embargo, gracias a que el descontento se expresó por esta vía, lo que se inició como una crisis, al paso de los meses se convirtió en una transición, en una etapa en la que la

¹ Agradezco a los miembros del seminario de Política Interna del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, sus comentarios a una primera versión de este trabajo.

democracia luchaba por instalarse y el autoritarismo se tambaleaba parcialmente. Así, el agotamiento de las fórmulas establecidas de organización y de negociación políticas no dio lugar a una ruptura súbita con el pasado, sino a un proceso de cambio del régimen de Estado autoritario y partido dominante a nuevas formas, que aun están por definirse, pero que a lo largo de 1989 todavía apuntaban hacia el afianzamiento de una sociedad con mayor autonomía política, y hacia el pluripartidismo.

El crecimiento de la oposición electoral creó serias perturbaciones durante el gobierno del presidente De la Madrid; no obstante, el simple hecho de que la protesta se hubiera expresado así, esto es, a través de los canales establecidos, revela el temperamento esencialmente conservador de esta movilización. Al contrario de lo que dejaba predecir la gravedad del deterioro económico, el descontento no desembocó en un estallido generalizado de violencia, los grupos extremistas —sobre todo de derecha— que aparecieron en ese momento fueron siempre pequeños y en cierta forma se mantuvieron aislados. La oposición no tuvo que crear organizaciones nuevas, sino que pudo recurrir a las que ofrecía el propio régimen, y encontró cabida en los partidos establecidos, primero el PAN y luego el pequeño mosaico de formaciones de izquierda que en 1988 acogieron a la disidencia priista. La importancia de este fenómeno no puede dejarse de lado, sobre todo si tenemos en cuenta las experiencias de desestabilización que han experimentado algunas sociedades en situaciones de crisis económica similares a la mexicana. Por otro lado, esta reacción por así llamarla “institucional” parece también fruto del principio de que “la estabilidad alimenta estabilidad”.

Las fuerzas políticas tradicionalmente identificadas con la derecha —las organizaciones empresariales, la jerarquía eclesiástica, el Partido Acción Nacional, grupos de clase media y alta— desempeñaron un papel decisivo en el desmantelamiento de la hegemonía electoral priista. El estímulo a la unificación de estos grupos, que en condiciones normales se mantendrían dispersos,² provino en primer lugar de una crisis política incubada a lo largo de 1981 que cristalizó en la nacionalización bancaria de septiembre de 1982. Por otro lado, la articulación de estas oposiciones fue también fruto del cambio de actitudes generadas por décadas de crecimiento y por doce años —1970-1982— de relativa prosperidad para los grupos de ingresos medios y altos, y fue asimismo

² Para una clasificación de las diferentes derechas mexicanas en el siglo XX, ver: Soledad Loaeza, “Conservar es hacer patria”, en: Soledad Loaeza, *El llamado de las urnas*, México, Cal y Arena, 1989, pp. 225-240.

efecto de un proceso de largo plazo de estratificación social. El factor de coagulación de los descontentos fue el antiestatismo y su canal de expresión el Partido Acción Nacional, que entre 1983 y hasta 1988, se convirtió en el portavoz de esta familia ideológica.

La movilización de protesta se articuló primero en medios de clase alta y media, cuyo activismo contrastó vivamente con la relativa parálisis y quietud de las clases populares y de las organizaciones de izquierda, por lo menos hasta el movimiento universitario de la ciudad de México de 1986. Es cierto que durante el periodo hubo manifestaciones en contra de la carestía de la vida, el deterioro salarial, o las políticas económicas en general. Asimismo, aparecieron organizaciones de defensa popular, pero su repercusión sobre el poder no es comparable con el de la oposición electoral que logró modificar el comportamiento de las autoridades gubernamentales, no sólo en el ámbito de las urnas. En realidad no fue sino hasta la elección presidencial de 1988 que la oposición de izquierda logró hacerse presente en el tablero electoral.

La defensa del principio de las libertades democráticas contra las arbitrariedades de un Estado abrumado por la deuda externa, el descrédito de la élite política, y su propia ineficiencia, fueron la base de una movilización electoral centrada en coaliciones de intereses relativamente diversos que se acogieron a la estructura partidista de Acción Nacional. El cambio político mexicano de los últimos años lleva la huella de esta participación.

Para el partido Acción Nacional, fundado en 1939, el periodo 1983-1988 fue una etapa de crecimiento y consolidación. Nunca antes el panismo había ocupado una posición central en el debate público, como ocurrió en esos años; tampoco había logrado despertar tanta curiosidad y simpatía, ni atraer tanto apoyo y votantes. Fue entonces cuando por fin, después de casi medio siglo de travesía por el desierto, el PAN pudo hacer valer sus tradiciones, su papel en la historia política reciente, su capacidad de influencia y, sobre todo, su funcionalidad. Paradójicamente, ese mismo proceso de expansión y fortalecimiento delimitó su alcance y cristalizó las fronteras de su representatividad.

La elección presidencial de julio de 1988 fue una decepción para el PAN. Su candidato, Manuel J. Clouthier, obtuvo menos del 17% de la votación total, esto es, sólo dos puntos porcentuales más que su predecesor, Pablo Emilio Madero, en 1982. Con este resultado Acción Nacional podía considerarse tan perdedor como el PRI. Aunque logró sumar más de cien diputados en la Cámara, y convertirse así en la segunda fuerza del Poder Legislativo, este triunfo era un pobre reflejo de la excepcional prosperidad que había experimentado el partido du-

rante el sexenio y que había alimentado en el PAN la pretensión de constituirse en la segunda fuerza electoral del país.

La proporción relativamente pequeña de votos que recibió el candidato Clouthier indica que el incremento de la presencia política de Acción Nacional no fue expresión del arraigo de los valores religiosos en la sociedad mexicana, como sostenían algunos en vista de la asociación del partido con la doctrina social de la Iglesia; en tanto que otros señalaban que la nueva fuerza del PAN obedecía a un desplazamiento político de grandes sectores de la población hacia posiciones liberales y antiestatistas. El contraste entre las expectativas y los resultados revela, en primer lugar, que la fuerza del PAN fue considerablemente inflada por los medios de comunicación. En lugar de ser la alternativa que arrasaría al PRI con una masa de votantes democráticos, que la prensa nacional y extranjera —en particular norteamericana— describía, todo indica que el auge panista fue, al parecer y antes que nada, expresión de la inconformidad de los grupos privilegiados de la sociedad, que son también los que mayor capacidad tienen para articular sus críticas y para acceder a los medios de comunicación, y como hablan más fuerte, su voz se confunde con la voz de la mayoría.³ El porcentaje de votos inesperadamente alto que, en cambio, recibió Cuauhtémoc Cárdenas (31%), candidato de los partidos de izquierda aglutinados en el improvisado Frente Democrático Nacional, confirma esta impresión.

Para explicar las razones del extraordinario crecimiento de la influencia —antes que presencia electoral— de Acción Nacional a partir de 1982, y las de su relativo fracaso en 1988, aquí se tratará de demostrar que en el cambio político reciente la derecha antiestatista en México cumplió dos funciones sucesivamente. Primero, encabezó la lucha contra el autoritarismo, y al hacerlo estableció los parámetros de una transformación política centrada en elecciones y partidos. Luego, las políticas del gobierno de De la Madrid y la escisión cardenista del partido oficial, decantaron la protesta antigubernamental que Acción Na-

³ En 1981 John Kenneth Galbraith escribía respecto a Estados Unidos: “. . . Es indudable que una gran parte del comentario económico proviene de personas que disfrutan de una situación acomodada. Una posición elevada en la sociedad, en el mundo de los negocios o en la academia, abre a quien la ocupa la puerta de la televisión, la radio y la prensa, y el acceso profesional a los medios también asegura un ingreso relativamente alto. De ahí se sigue que normalmente, la voz del privilegio económico, como habla más fuerte, se confunde con la voz de la mayoría.” Si esto es cierto para la democracia norteamericana, mucho más lo será para una sociedad crecientemente dominada por las desigualdades. Ver: “The conservative onslaught”, *The New York Review of Books*, 22 de enero de 1981, p. 30.

cional había encauzado durante el sexenio, de suerte que para 1988 este partido volvió a desempeñar el papel de válvula de escape del descontento de clase media.

Para discutir esta hipótesis es preciso examinar antes la alteración de las identidades políticas que produjo en México la crisis del Estado como agente central del crecimiento económico y como actor político fundamental. La importancia de este fenómeno, para entender el proceso de la derecha, reside en que contribuyó a legitimar temas y posiciones que durante años habían sido descartados de la discusión pública porque se identificaban con la contrarrevolución. La creciente influencia de las críticas liberales y antiestatistas, que en muchos casos se hacían desde el propio Estado, modificó las referencias políticas establecidas. La propuesta modernizadora del gobierno del presidente De la Madrid se planteaba en términos que hasta entonces habían sido exclusivos de una oposición asociada a la contrarrevolución y condenada por la historia, al menos por la que se había escrito hasta ese momento. Este cambio de temas y de prioridades puede resumirse en una equiparación en la lucha política de los intereses particulares con los intereses colectivos que debía representar el Estado, paridad, cuando no superioridad, impensable para la tradición revolucionaria.

La segunda parte de este trabajo analizará la legitimación de la derecha a la luz de causas tendenciales relacionadas con la estabilización de la estructura social, y de una causa inmediata: la nacionalización de la banca decretada en septiembre de 1982, que fue el punto culminante de las tensiones y los enfrentamientos entre el gobierno y la iniciativa privada, provocados por la crisis financiera del año anterior. El tercer apartado tratará de describir la evolución de la derecha aglutinada en torno a Acción Nacional, que pasó de ser un partido receptor de la protesta antiautoritaria, a ser un partido de clase, que canaliza las demandas de participación de las clases medias y altas.

En esta historia líderes y organizaciones de la empresa privada desempeñan un papel central, pues, a consecuencia de los desacuerdos a propósito de las dificultades económicas de los últimos meses del gobierno lopezportillista,⁴ algunos optaron por la participación política directa y el activismo. Esta decisión indujo cambios importantes en los hábitos políticos establecidos y, de ahí, en el régimen. En tanto que el autoritarismo priista y sus gobiernos lograron mantener una estabili-

⁴ Para una descripción detallada del deterioro económico del último año del gobierno de López Portillo y de sus relaciones con el sector privado ver: Rogelio Hernández Rodríguez, *Empresarios, banca y Estado. El conflicto durante el gobierno de José López Portillo. 1976-1982*, México, Flacso y Miguel Ángel Porrúa, 1988.

dad conforme a los intereses del capital, los empresarios guardaron una relativa indiferencia política. Cuando estos últimos consideraron que ese mismo poder podía volverse en su contra, decidieron imponerle límites. Así, los empresarios irrumpieron en Acción Nacional. La importancia de este movimiento estriba menos en sus efectos sobre el partido, que en el hecho de que gracias a la existencia de esta organización y de su flexibilidad para acoger a los nuevos aliados, los empresarios que decidieron hacer política abandonaron la oposición desleal de los últimos meses de 1982,⁵ e integraron sus demandas a la mecánica partidista y electoral. Su participación fue determinante en la coalición panista; mucho más importante y comprometida que la de la Iglesia católica, pues no obstante que numerosos obispos apoyaron abiertamente esta oposición, la coyuntura fue una oportunidad para que las autoridades eclesiásticas dieran prueba del valor de su colaboración con el Estado en un momento de crisis.

LA CRISIS DEL ESTADO EN MÉXICO Y LA ALTERACIÓN DE LAS IDENTIDADES POLÍTICAS

En México las críticas al intervencionismo estatal se generalizaron hasta 1982. Mientras en los países industriales el neoliberalismo se había instalado como una poderosa fuerza de atracción desde principios de los setenta, en esa misma década la expansión de las actividades económicas del Estado fue la clave del crecimiento mexicano, que osciló entre tasas de 6% a 9% anual.

No obstante, la prosperidad de esos años tuvo una vida breve, pues había sido respaldada en buena medida por deuda externa y el auge petrolero que duró hasta 1981. El 1 de septiembre de 1982, el presidente José López Portillo nacionalizó los bancos privados, para enfrentar el estrangulamiento financiero de su gobierno, esto es, como una medi-

⁵ Esta forma de oposición normalmente se identifica con partidos políticos, sin embargo, en el caso mexicano tal noción también puede aplicarse a las organizaciones empresariales, dada su naturaleza parapolítica. La descripción de Juan Linz de la oposición desleal podría utilizarse en relación con algunas organizaciones empresariales durante los últimos meses del gobierno del presidente López Portillo y los primeros del que lo sucedió. Por ejemplo, la representación de los adversarios como instrumentos del exterior —en este caso, la Internacional Socialista—, o la denuncia de la corrupción para poner en tela de juicio no sólo a una persona sino al conjunto de las instituciones políticas. Ver: Juan J. Linz, *The breakdown of democratic regimes. Crisis, breakdown and reequilibration*, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press, 1978, pp. 27-38.

da de urgencia económica y política, mas no como parte de una reforma de largo plazo. En consecuencia, y contrariamente a lo que muchos pensaron, esta decisión no renovó la capacidad de iniciativa del Estado mexicano, sino que fue el punto de partida de un enjuiciamiento general que reprodujo en este país críticas antiestatistas y propuestas liberales, también empujadas por las experiencias de otros y por el derrumbamiento de las utopías de izquierda. Paradójicamente, el acto de autoridad del presidente López Portillo que pudo haber servido para apuntalar al Estado, fue más un final que un prelude. Fue el canto del cisne del Estado revolucionario mexicano, con el que se inició un debilitamiento que transformó los equilibrios políticos.⁶

En los países industriales las dificultades del intervencionismo estatal en los años setenta y los descontentos y conflictos que causaba, provocaron el agotamiento del consenso keynesiano de la segunda posguerra y pusieron en serios aprietos a los partidos de izquierda.⁷ Pero si en ese contexto la crisis de esta alternativa política fue de alguna manera parcial, en el caso mexicano puso en tela de juicio los fundamentos mismos de toda la estructura política, y las referencias centrales de su lenguaje.

En 1970, el presidente Luis Echeverría había recurrido a la auto-crítica para distinguirse de su predecesor y para salvar la cara del partido que lo había llevado al poder, que también había apoyado a Gustavo Díaz Ordaz, responsable de la feroz represión del movimiento estudiantil de 1968. A partir de esta solución, el régimen había encontrado una fórmula de recomposición, la liberalización gradual de la participación independiente, que le prolongó la vida doce años. Podría decirse que en 1982, nuevamente la supervivencia del régimen dependía de la capacidad del presidente De la Madrid para distanciarse de

⁶ "La fecha que inicia la nueva era del Estado, es justamente la de su última expansión histórica: el 1 de septiembre de 1982, día en que el presidente José López Portillo nacionalizó la banca. Fue el acto de mayor autonomía estatal desde la nacionalización del petróleo en 1938, pero también el encuentro de un techo de legitimidad y de consenso político para las facultades expropiatorias del Estado y, en particular, del Presidente." Héctor Aguilar Camín, *Después del milagro, un ensayo sobre la transición mexicana*, México, Cal y Arena, 1988, p. 22. El tema de la nacionalización de la banca sigue siendo, varios años después, profundamente divisivo. Para una interpretación muy favorable de esa decisión, ver: Hernández, *op. cit.*, pp. 263-266. Dos artículos de un mismo autor escritos a unos meses de distancia reflejan el tipo de contradicciones que produjo esta decisión, ver: Enrique Krauze, "El timón y la tormenta", *Vuelta*, octubre de 1982, núm. 72, vol. 6, pp. 14-22, y Enrique Krauze, "Por una democracia sin adjetivos", *Vuelta*, enero de 1984, núm. 86, vol. 8, pp. 4-13.

⁷ Ver, por ejemplo: Ludolfo Paramio, *Tras el diluvio. La izquierda ante el fin de siglo*, México, Siglo XXI, 1989, pp. 1-30.

las decisiones de su predecesor, sin por lo tanto renunciar al partido que los había llevado al poder a ambos. Pero en este caso la salida fue mucho más allá de una solución de recambio.

Aunque el presidente De la Madrid mantuvo *in pectore* su desacuerdo con respecto a la nacionalización bancaria, introdujo de entrada medidas de emergencia económica y reformas estructurales, que revelaban una crítica de las políticas precedentes, en particular respecto a la función económica del Estado, tanto más despiadada cuanto que las denuncias de su gobierno contra los excesos de la autoridad pública no se detenían en determinadas personas y decisiones, sino que iban al corazón del universo político mexicano: el Estado.

La crisis económica y las políticas de estabilización adoptadas por el gobierno de Miguel de la Madrid desde su llegada al poder, tendían a reducir la presencia social del Estado e, inevitablemente, a modificar su posición en la estructura de poder. Este desplazamiento propició una serie de reacomodos por parte de los demás actores políticos, que se apresuraron a ocupar los espacios que generó la contracción del Estado. Los reajustes crearon una situación de fluidez, fueron la base de una transición que se prolonga hasta la actualidad, de suerte que los avances de la sociedad de los que tanto se habló entonces, habrían obedecido a las dimisiones del “Leviatán exhausto”, antes que a ningún otro proceso.⁸ La consecuencia más importante de este desarrollo fue la instalación de los intereses particulares en el centro de la dinámica política.⁹

Este fenómeno tuvo repercusiones muy hondas en un régimen que había intentado superar la diversidad económica y cultural de la sociedad, asimilándola a la representación unitaria del Estado, y rechazando en consecuencia el pluripartidismo. La obsesión por la unidad y la convicción de que la primacía del Estado era la única fórmula para prevenir la inestabilidad, fueron temas que caracterizaron el discurso político durante años, y probablemente se expliquen porque la experiencia revolucionaria creó una especie de pánico a la fragmentación política. De tal suerte, durante décadas el régimen se sustentó en una construcción imaginaria en la que sólo cabían dos tipos de intereses: por un lado, los populares, que eran mayoritarios y revolucionarios, encarnados por el Estado, y, por otro, los que simplemente se definían por oposición a éstos: elitistas, minoritarios y contrarrevolucionarios. Esta tradición, sin embargo, fue abandonada por el presidente De la Madrid,

⁸ Ver: Aguilar Camín, *op.cit.*, p. 37.

⁹ Ver: Soledad Loaeza, “Desigualdad y democracia”, en: Soledad Loaeza, *El llamado de las urnas*, México, Cal y Arena, 1989, pp. 34-46.

quien en el Plan Nacional de Desarrollo de 1983-1988, sostuvo que la sociedad debía articular sus esfuerzos dentro del “marco de libertad y pluralismo” que ofrecía la Constitución.¹⁰ Consecuente con esta posición su gobierno acordó al pluralismo una legitimidad sin precedentes, que se contraponía a la historia del estatismo en México, y que anulaba algunas de las justificaciones básicas del autoritarismo y del virtual monopolio del PRI.

El proyecto de reordenación económica que se puso en marcha en diciembre de 1982 también comprometía, al igual que el reconocimiento oficial del pluralismo, aunque implícitamente, la función política del Estado, en la medida en que uno de sus propósitos centrales, la reducción del déficit público, limitaba su capacidad para intervenir en la organización y participación de la sociedad y, con ello, su capacidad de liderazgo social.¹¹ Este objetivo de política económica se mantuvo posteriormente como parte sustancial de un programa de reforma estructural de más largo plazo, cuya intención anunciada era despolitizar la economía como vía para garantizar la eficiencia y la productividad.

La escasez de recursos económicos fue una limitación obvia para que el Estado ejerciera sus funciones históricas de integración política y reconciliación social. Pero otro problema no menos grave fue la escasez de recursos simbólicos. Con el presidente De la Madrid llegó al poder un grupo de funcionarios provenientes del sector financiero de la administración pública, cuya relación con el partido oficial era muy lejana. Para resolver la crisis económica, esta nueva élite administrativa¹² se apresuró a repudiar algunas de las tradiciones del poder más arraigadas en México, tales como el estatismo y el populismo —que en este país ha consistido básicamente en someter la economía a las exi-

¹⁰ Ver: *Plan Nacional de Desarrollo. 1983-1988*, Suplemento de *El Mercado de Valores*, núm. 24, 1983, p. 13.

¹¹ La inversión privada era uno de los elementos centrales del proyecto de gobierno del presidente De la Madrid, de suerte que es probable que su rigor en materia de déficit público o de control salarial, se explique en gran parte por la necesidad de recuperar la confianza de un sector privado ultrajado por la nacionalización bancaria. También es posible que haya recurrido a la probada estratagema de arrebatar las banderas del adversario para neutralizar su oposición. Lo cierto es que el redimensionamiento del Estado, que era uno de los aspectos centrales del proyecto, y los argumentos que esgrimía el propio gobierno para fundamentarlo, contribuyeron de manera determinante a debilitar la autoridad pública, al tiempo que afianzaban las críticas antiestatistas de los grupos privados.

¹² Para este relevo de élites ver: Rogelio Hernández, “Los políticos del sistema mexicano”, en: Francisco López Cámara, coordinador, *Sociedad, desarrollo y sistema político en México*, Cuernavaca, UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 1989, pp. 65-72.

gencias del equilibrio político, subordinación revestida de justicia social—¹³ o la idea de que más sector público es mejor, y al hacerlo desquició las referencias establecidas. Se borraron los perfiles, de por sí imprecisos, de la izquierda y la derecha. Se modificó el contenido de la noción de democracia, que hasta entonces había sido entendida antes que nada como justicia social y prevalencia de lo público sobre lo privado; los particularismos que durante años habían sido denunciados como los peores enemigos de la nación y del Estado se convirtieron en los aliados de la causa democrática, y se impuso soberano el valor de la libertad.

Para el antiestatismo mexicano, que siempre había reivindicado la legitimidad de lo privado frente al Estado, el reconocimiento oficial de la validez de los intereses particulares fue una primera victoria. El segundo logro importante fue que el tema electoral cobrara preeminencia sobre cualquier otro en el plano del conflicto político, y que el multipartidismo fuera visto como una necesidad compartida por todos. El tercer triunfo consistió en circunscribir el debate público en torno a la democracia mexicana al terreno electoral y partidista, a expensas de las condiciones sociales y económicas de la democracia.

Este abandono del estatismo y de algunos de los paradigmas de la tradición de la Revolución mexicana —como el imperativo de una estructura de autoridad centralizada— que había sido durante décadas la única tradición política legítima, implicó para el propio Estado un “desarme ideológico” —como ocurrió a la izquierda latina en los años setenta, según lo señala Ludolfo Paramio—, que lo dejó “. . . inerme frente a la ofensiva, política e ideológica, del nuevo conservadurismo.”¹⁴

El partido oficial no fue el único al que se le arrebató sus señas de identidad. También todos los mexicanos que habían estado expuestos a la labor socializadora del Estado, esto es a la educación pública, y que eran muchos, y cuyos valores eran los de la Revolución mexicana-

¹³ En el discurso de toma de posesión el presidente De la Madrid, rechazó el populismo porque —dijo— cedía ante lo inmediato y hacía retroceder a la sociedad. Más adelante, en 1986 y en contra de toda expectativa de que dada la naturaleza esencialmente popular del Estado mexicano el presidente se vería tentado a recurrir otra vez al gasto público para satisfacer compromisos políticos, De la Madrid afirmó en una entrevista de prensa: “Acudir a ficciones económicas para sostener niveles de satisfacción que no están respaldados por nuestra economía. . . genera las más graves consecuencias para los intereses populares.” Ver: “Entrevista con Mario Ezcúrdia”, *El Nacional*, diciembre de 1986, en: Presidencia de la República, *El Gobierno de México*, México, Talleres Gráficos de la Presidencia, 1987, núm. 49, diciembre de 1986, pp. 71-106, p. 73.

¹⁴ Paramio, *op.cit.*, p. 26.

na, quedaron súbitamente huérfanos de patrocinio político. La pérdida fue tanto más desconcertante cuanto que la cacofonía dominó los mensajes que emitían las oficinas gubernamentales, las autoridades políticas, el partido oficial y sus sindicatos. En esta confusión, ganaron terreno rápidamente quienes tenían demandas puntuales y capacidad para hacerse escuchar.

La atmósfera revuelta fue propicia para que la derecha antiestatista¹⁵ tomara la batuta de la oposición antigubernamental, y en poco tiempo registrara importantes avances, gracias también a que sus temas estaban respaldados por la autocrítica del Estado, y por un contexto internacional dominado por el desprestigio de los autoritarismos.¹⁶

LA LEGITIMACIÓN DE LA DERECHA ANTIESTATISTA EN MÉXICO

Uno de los primeros efectos políticos de la nacionalización de la banca de septiembre de 1982 fue que precisó la identidad de una derecha mexicana, que hasta entonces se había movido dentro de una vaga nebulosa ideológica en la que se mezclaban indistintamente empresarios y católicos, y en general los llamados “grupos más conservadores de la sociedad”. La reacción defensiva que provocaron decisiones de política económica de última hora del presidente López Portillo, tales como que los depósitos bancarios en moneda extranjera fueran pagados a sus titulares en pesos —esto es, los mexdólares— y desde luego la nacionalización de la banca,¹⁷ se convirtieron en la piedra de toque de la coalición opositora más poderosa a la que se enfrentó el gobierno del presidente De la Madrid, hasta la escisión cardenista de 1988.

El sentido último de estas decisiones era recuperar la soberanía del Estado amenazada por la rebelión empresarial que expresaba la fuga de capitales y cuyas dimensiones fueron comparadas por un observador a una “deserción nacional”,¹⁸ y su efecto político inmediato y de mediano plazo fue la unificación de las fuerzas antiestatistas, en la me-

¹⁵ Ver: Loaeza, “Conservar es hacer patria”, *art. cit.*

¹⁶ Para los efectos de la cruzada democrática reaganiana en México ver: Soledad Loaeza, “Nacionalismo y democracia: tensión entre dos ficciones”, en: Rolando Cordeira Campos, Raúl Trejo Delarbre, Juan Enrique Vega, (coordinadores), *México: el reclamo democrático. Homenaje a Carlos Pereyra*, México, Siglo XXI Editores, 1988, pp. 98-112.

¹⁷ Para una descripción detallada de la fuga de capitales, la dolarización de la economía, y, en general, los desacuerdos, ires y venires de la política económica en los meses previos a la nacionalización, ver: Hernández Rodríguez, *op.cit.*, pp. 250-260.

¹⁸ Ver: Krauze, “El timón y la tormenta”, *art. cit.*, p. 15.

dida en que actualizaron el punto de convergencia de los diversos grupos que se identifican con la defensa del individuo, o de la persona, frente al Estado. No obstante esta importancia, la verdadera trascendencia política de estas decisiones consistió en que dada su naturaleza autoritaria, imprimieron al antiestatismo una dimensión moral de la cual carecía.

Hasta ese momento la derecha antiestatista era en México una tradición en cierta forma clandestina, en vista de que la historia y las persistentes desigualdades eran una condena moral a su asociación con actitudes y políticas antiiguales, y antipopulares. Sin embargo, para muchos, en primer lugar para un sector considerable de la empresa privada, y no sólo para los banqueros, la manera sorpresiva y arbitraria en que el presidente de la República había expropiado ahorros —con los mexdólares— y bancos, había sido un ultraje, “un agravio”¹⁹ exacerbado por la corrupción, el derroche y la frivolidad que se atribuían a la élite política en esos momentos. Así, estas decisiones financieras pudieron ser vistas como un ejemplo de los abusos del poder que podían afectar a cualquier sector de la sociedad. Por consiguiente tuvo un eco muy amplio, y no fueron pocos los que, sin ser empresarios ni banqueros, tenían depósitos bancarios en dólares y, por consiguiente, se identificaron en una reacción antiautoritaria, con esas nuevas víctimas del Estado, ya no con el victimario.

Semejante solidaridad se manifestó sobre todo en los primeros años del sexenio delamadridista y se explica, primero, por una campaña sostenida —probablemente por algunas organizaciones empresariales— de ataques en contra del presidente López Portillo, de algunos de los funcionarios más notables de su gabinete y de las políticas populistas, que se prolongó durante casi todo el periodo. Luego, la fuerza de la causa de la empresa privada se derivaba también del hecho más general: de que a lo largo de los años setenta, en buena medida gracias a la prosperidad, se había desarrollado una cultura de la participación en amplios sectores sociales. Esto significa que, de manera creciente, los asuntos públicos estaban sometidos al escrutinio de diferentes grupos, normalmente urbanos y educados, los cuales consideraban que la autoridad ya no podía tomar decisiones, y mucho menos así de radicales, de espaldas a la opinión pública.²⁰

¹⁹ Esta idea del agravio fue brillantemente utilizada por Enrique Krauze, a partir de un texto de Daniel Cosío Villegas, para describir primero el malestar que provocó la fuga de capitales de la empresa privada de los años 1981-1982 y luego la imagen de corrupción del gobierno lopezportillista. Para ambos usos ver: Krauze, “El timón y la tormenta”, *art. cit.*, y “Por una democracia sin adjetivos”, *art. cit.*

²⁰ Ver: Soledad Loaeza, “The emergence and legitimization of the modern right,

Vista desde la perspectiva amplia de las relaciones entre el poder y la sociedad, o entre el ciudadano y su gobierno, la nacionalización bancaria en particular se convirtió en una prueba patente de antidemocracia. Más todavía porque no era consistente con el tono general de la política lopezportillista, que hasta 1981 había sido notablemente favorable a los intereses empresariales y, desde luego, tampoco había sido discutida en las Cámaras.

El hecho de que los desajustes económicos y las decisiones financieras pudieran ser presentadas como una medida de salvación personal, que poco o nada tenía que ver con el interés general en un cuadro general de desgobierno, fue la vía para que el antiestatismo se integrara a un nuevo proyecto de democracia mexicana. Gracias a la identificación de esas medidas con la corrupción del espíritu de la élite política, los grupos de poder económico pudieron abandonar su relativa pasividad política y explicar este cambio como una reacción defensiva justa, que podía asimilarse a demandas generales de limitación del poder estatal. A partir de ahí intentaron ejercer un liderazgo social ampliado con el manejo de los valores elementales de la democracia occidental: la propiedad privada y las garantías individuales —en particular, la libertad.²¹

Por mucho que se considerara injusto el tratamiento que López Portillo había dado a los empresarios, y en especial a los banqueros en septiembre de 1982, esta confrontación interelitista no bastaba para impulsar el antiestatismo como una alternativa política viable y deseable para un país como México. Este significativo cambio también se apoyó en causas mediatas, en transformaciones más profundas que se habían operado en el seno de la sociedad en los últimos veinte años.

En México el espectro partidista nunca había reflejado las diferencias entre las clases. Este fenómeno podría explicarse por la existencia de una estructura política centralizada, uno de cuyos pilares era un partido que pretendía ser pluriclasista y representar a los más diversos intereses. Sin embargo, las características de la propia sociedad también explican esta indiferenciación política.

La Revolución mexicana desencadenó un proceso de movilización social, en el sentido en que lo define Karl Deutsch, es decir, el derrumbamiento de los patrones de comportamiento y socialización del anti-

1970-1988", en: Wayne A. Cornelius, Judith Gentleman y Peter H. Smith, *Mexico alternative political futures*, San Diego, California, Center for U.S.-Mexican Studies, 1989, pp. 351-360.

²¹ Ver: Graciela Guadarrama, "Empresarios y política: Sonora y Nuevo León, 1985" *Estudios Sociológicos*, vol. 5, núm. 13, enero-abril, 1987, pp. 139-168.

guo régimen entre amplios sectores de la población, que dejó el camino abierto a la adopción de nuevos hábitos, símbolos, creencias y conductas sociales.²² Este cambio acarreó también la transformación de las jerarquías de autoridad y perturbó durante largo tiempo las fronteras entre las clases, en esos términos. Semejante imprecisión se acentuó a partir de los años cuarenta, en virtud de la industrialización que abrió canales de movilidad social y la estructura del empleo, el crecimiento de las ciudades, y, sobre todo, la expansión de los servicios educativos se hicieron más complejos. Así, durante mucho tiempo la sociedad mexicana se mantuvo en un estado de relativa fluidez que dificultaba la fijación de identidades de clase.

No obstante, el mantenimiento de la estabilidad política y el desarrollo relativamente ininterrumpido de la economía, crearon un contexto favorable para la estabilización general de la sociedad. Ciertamente, los desequilibrios del modelo de crecimiento, que empezaron a manifestarse desde finales de la década de los sesenta, propiciaron el desarrollo de una sociedad marcadamente desigual. En 1977, los dos deciles superiores de la estructura de ingreso, esto es, el 20% de la población, recibía el 50% del ingreso, mientras que los dos deciles más bajos percibían sólo el 3.54%.²³ A pesar de que durante los años setenta la economía mexicana registró tasas elevadas de crecimiento anual que oscilaron entre 3% y 9%, este proceso consolidó la estructura social. Los grupos de ingresos medios y altos, que eran también los que poseían mayor capacidad de influencia política, fueron los principales beneficiarios de ese crecimiento.

La evolución de la educación ilustra este proceso, en vista de que incluso hasta la fecha la relación entre ingreso y nivel de escolaridad sigue siendo positiva. Desde la década de los cuarenta, el Estado mexicano adoptó el paradigma liberal que ve en la educación gratuita y universal el principal instrumento contra la desigualdad social. No obstante los indiscutibles esfuerzos que se hicieron en este terreno en el México posrevolucionario, la escuela tampoco pudo escapar al condicionamiento que le imponían los desequilibrios de la estructura económica. En 1970 apenas 30% de la población de más de 15 años había

²² Para una descripción de los primeros tiempos de este proceso ver: Alan Knight, *The Mexican Revolution*, Cambridge University Press, 1986, 2 vols. Ver en particular vol. 1, pp. 320-387.

²³ Ver: Nora Lustig, "La desigual distribución del ingreso y de la riqueza", en: Rolando Cordera y Carlos Tello (coordinadores), *La desigualdad en México*, México, Siglo XXI, 1984, pp. 281-292.

completado la educación primaria.²⁴ Entre 1970 y 1976, el gobierno de Luis Echeverría hizo un esfuerzo muy importante para satisfacer la demanda de educación media, que se consideraba un requisito indispensable para formar mano de obra calificada o para ampliar el ingreso a la educación superior. Por consiguiente, en esos años el incremento de la matrícula en este nivel sostuvo una tasa media anual de 10%, pero se mantuvieron “. . . patrones de discriminación social que limitaron sus potencialidades democratizadoras, lo que permite calificar a lo ocurrido en la secundaria como un proceso de masificación socialmente selectiva”.²⁵ De suerte que la expansión educativa reprodujo, y en algunos casos acentuó, desequilibrios regionales y económicos.

La desigualdad se ha expresado en una diferenciación social creciente que ha dado lugar a la aparición de subculturas de clase, que definen también patrones distintos de comportamiento político. Así, la movilización electoral de los años 1982-1988, por ejemplo, demostró que mientras la despolitización y la desinformación están positivamente relacionadas con analfabetismo y con tasas altas de abstencionismo electoral, o en todo caso con votaciones de más del 100% por el partido oficial, en términos generales el voto de protesta es un instrumento de participación política que está directamente asociado con ingresos altos. Además esta variable también incide en la preferencia por la acción a través de partidos antes que a través de sindicatos o de movimientos. Al menos es la conclusión que se desprende del análisis de los comicios locales que se celebraron en ese periodo.²⁶ Los estados donde se manifestó con más fuerza la oposición electoral al PRI —Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Baja California y Coahuila— son también estados con bajos índices de marginación, donde la tasa de alfabetización oscila entre 85% y 95%, para no mencionar la capital de la república, el Distrito Federal, donde en 1985 el PRI obtuvo menos de 50% de votos en la elección para renovar la Cámara de Diputados.²⁷

El contenido mismo de la protesta electoral que benefició en particular a Acción Nacional, confirma esta impresión respecto al origen so-

²⁴ Ver: Julio Boltvinik, “Satisfacción desigual de las necesidades esenciales en México”, en: Cordera y Tello, *op. cit.*, pp. 17-64, p. 42.

²⁵ Olac Fuentes Molinar, “Enseñanza media básica en México: 1970-1976”, en: *Cuadernos Políticos*, enero-marzo de 1978, núm. 15, pp. 90-104, p. 94.

²⁶ Ver: Carlos Pereyra, “La desigualdad política”, en Cordera y Tello, *op. cit.*, pp. 113-124.

²⁷ Para los resultados electorales de los diversos comicios celebrados entre 1983 y 1987, ver: Juan Molinar Horcasitas, “Los procesos electorales: 1983-1987”, en Germán Pérez y Samuel León (coordinadores), *17 ángulos de un sexenio*, México, Plaza y Valdés, 1987, pp. 189-223.

cial de buena parte de los electores antipriíistas de los años ochenta. Como se señaló más arriba, la oposición más articulada en contra del Estado y del partido oficial entonces, estuvo en manos de grupos de privilegio que en nombre de un principio —la primacía de los derechos individuales— rechazaban la autoridad extendida del Estado. Es decir, contrariamente a lo que los datos de la economía hubieran dejado esperar —por ejemplo, el hecho de que entre 1982 y 1987 la caída acumulada del salario mínimo superara el 40%, o que la participación de la masa salarial en el ingreso total hubiera disminuido de 42% a 30% en el mismo lapso—²⁸ la protesta electoral estaba antes que nada dirigida contra el estatismo, o si se quiere contra el centralismo político y el intervencionismo del Estado en la economía. La política de austeridad y sus costos sociales no eran el tema central de la movilización panista, que en todo caso concentraba sus críticas en el crecimiento de un “gasto público hiperdeficitario”, en la “reducción de los campos de acción de los particulares en la vida económica”, en “la desmedida intromisión gubernamental” y en el “enriquecimiento del gobierno” vía la inflación.²⁹

De tal suerte, puede pensarse que esta movilización electoral se inspiraba más que nada en la defensa de una posición privilegiada —en la medida en que en un país como México las clases medias son en su mayoría grupos de privilegio— que se sentía amenazada por un Estado ineficiente y corrupto antes que por un proletariado en armas, una burguesía cerrada y distante o un gobierno de izquierda. A través del voto por la oposición estos grupos, fortalecidos por el crecimiento desigual de los años inmediatamente anteriores, se rebelaron contra un régimen que no sólo había violado la propiedad privada, sino que ya no parecía capaz de garantizar la prosperidad, y tal vez ni siquiera la estabilidad social.

Así, la movilización electoral del periodo 1982-1988 reveló las tendencias conservadoras que la legendaria estabilidad mexicana había alimentado en sectores sociales clave. Es cierto que con su voto se pronunciaban por un cambio político, pero limitado, en la medida en que se trataba de modificar prácticas y hábitos antes que instituciones, con el objetivo último de preservar el orden social existente. Por otro lado, la historia electoral de ese periodo también enseña que la consolidación

²⁸ Ver: Nora Lustig, “La desigualdad económica”, *Nexos*, 128, agosto de 1988, pp. 8-11, p.9.

²⁹ Ver: Partido Acción Nacional, *Plataforma 1985-1988*, México, s.e., febrero de 1985.

social había creado las condiciones favorables a la formación de partidos de clase.³⁰

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL:

CANAL DE LA PROTESTA ANTIAUTORITARIA Y PARTIDO DE CLASE

A diferencia del partido oficial, desde su nacimiento Acción Nacional apareció como una organización limitada por “. . . los principios que integran (nuestra) interpretación de la sociedad y de la Patria. . .”.³¹ La identificación original del PAN con las clases medias se desprende de los valores que primero lo inspiraron, y que pueden resumirse en la defensa del individuo frente al Estado. De ahí se deriva el compromiso con la propiedad privada y la convicción de que el voto, la expresión política individual por excelencia, es la forma ideal de participación.

El origen mismo de Acción Nacional comprueba la naturaleza clasista de la organización. El PAN nació como reacción contra las políticas populares del cardenismo y la autoridad ampliada del Estado, pero también contra la intensa movilización sindical y agraria, que marcó el periodo. La participación de las clases populares despertaba grandes inquietudes entre las nacientes clases medias de la época, que se sentían injustamente desplazadas del poder por la atención que el gobierno dispensaba a obreros y campesinos.³² El PAN nunca se presentó como un partido de clase, pero se formó —como se dijo entonces— con el propósito de despertar la conciencia ciudadana, aletargada —según el propio Gómez Morín— desde 1909,³³ esto es, para contrarrestar la movilización popular de esos treinta años. Sólo esta autodefinition bastaría para revelar los antagonismos que inspiraron el nacimiento de Acción Nacional.

³⁰ Para la discusión de los efectos de la estratificación social sobre la relación entre clase social y comportamiento político ver: Seymour Martin Lipset, *Revolution and counterrevolution, change and persistence in social structures*, Oxford, Transaction Books, 1988, pp. 203-223.

³¹ Ver: Manuel Gómez Morín, “Informe a la Asamblea Constituyente de Acción Nacional, rendido el 14 de septiembre de 1939”, en Manuel Gómez Morín, *Diez años de México*, México, Editorial Jus, 1950, p. 8.

³² Para un amplio desarrollo de esta tesis a propósito del desplazamiento de las clases medias del poder político durante el cardenismo ver: Soledad Loaeza, *Clases medias y política en México. La querrela escolar 1957-1963*, México, El Colegio de México, 1988.

³³ *Ibid.*, p. 5.

Algunos de los principios doctrinales del partido lo asociaban irremediabilmente con fuerzas que en algún momento se habían opuesto al Estado revolucionario. Así por ejemplo, el combate histórico del PAN contra la educación laica obligatoria que dicta la Constitución, planteaba de inmediato el tema de los derechos de las iglesias, en particular de la Iglesia católica, que llevó su oposición a la Revolución hasta apoyar una rebelión armada, la Cristiada. La consistente defensa que hacía el PAN de la legitimidad de la iniciativa privada y su sostenida asociación con miembros notables del empresariado nacional, sobre todo en la gran ciudad industrial de Monterrey, permitieron que el partido oficial identificara al PAN con la contrarrevolución y con los grupos de privilegio. Aun cuando esta identificación fuera casi exclusivamente retórica, sobre todo durante los años del crecimiento estabilizador cuando más sólida era la alianza entre el Estado y los empresarios, y más escuálido su hipotético apoyo a Acción Nacional, se mantuvo su imagen de partido de los privilegiados. Tanto así, que es muy probable que al iniciarse la década de los ochenta, ése haya sido uno de sus atractivos para grupos de clase media que ante la gravedad de la crisis económica pueden haber visto en el panismo también un símbolo de *status*.³⁴

Como se señaló antes, Acción Nacional se formó originalmente a partir de la reacción de grupos de clase media en contra de la influencia, que juzgaban desproporcionada, de obreros y campesinos sobre la acción del gobierno cardenista. Pero además la fundación del PAN puede ser analizada no sólo desde la perspectiva de clase social, sino también como estrategia de defensa de sectores de opinión que rechazaban el discurso colectivista, secularizador, estatista y, en última instancia radical, del cardenismo. Así, en un primer tiempo el PAN logró congregiar oposiciones relativamente diversas que desde el catolicismo y el liberalismo convergían en la resistencia al Estado.³⁵ Entre 1982 y 1988 estas dos vertientes se encontrarían nuevamente en la crítica antiestatista, aunque la segunda ganaría preeminencia por el peso de los

³⁴ Los análisis más convencionales del comportamiento político de las clases medias han tendido a aplicar el modelo dicotómico que explica sus contradicciones internas en términos de la oposición entre grupos emergentes y tradicionales, con base en el presupuesto de que los primeros promueven el cambio contra la resistencia de los segundos. No obstante, la movilidad social se suscribe en primer lugar a través de la adopción de los comportamientos y de la simbología del grupo al cual se accede. Así, el comportamiento de los grupos "nuevos" puede llegar a ser tanto o más conservador que el de los establecidos. Ver, Loaeza, *Clases medias y política en México, op. cit.*, pp. 51-55.

³⁵ Para un análisis de esta convergencia original, ver: Loaeza, *Clases medias y política en México, op. cit.*, pp. 92-101.

empresarios que recurrieron a Acción Nacional para emprender su proyecto de reforma política. Así nació el llamado *neopanismo*.

Durante los años cincuenta y sesenta el PAN estuvo dominado por la corriente católica, en virtud de que desde el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946), la élite política se propuso la formación de un sector privado robusto que contribuyera al desarrollo de una sólida economía capitalista. Con esta finalidad se implantaron políticas económicas y fiscales que fueron la base de una alianza de largo plazo entre el Estado y los empresarios. Esta orientación canceló la posibilidad que habían contemplado algunos de los fundadores de Acción Nacional de que su partido fuera el brazo político del sector privado. Así, aunque la retórica oficial se empeñó en presentar al PAN como instrumento de los empresarios, en realidad hasta principios de los setenta el partido estuvo en manos de militantes católicos que le imprimían un sello característico a sus principios de doctrina y de acción.

El predominio de esta influencia, expresada en el hecho de que entre 1950 y 1972 ocuparon la presidencia del partido antiguos dirigentes de Acción Católica, no significa que el PAN dependiera de la Iglesia católica. Entre ésta y el Estado prevalecía un *modus vivendi*, establecido también desde los años cuarenta, que negaba participación política pública a la Iglesia. La violación de este acuerdo hubiera podido provocar perturbaciones indeseables en una relación que, por lo menos hasta la década de los ochenta, parecía satisfactoria para ambas partes. Puede entonces afirmarse que a lo largo de la mayor parte de su historia el PAN fue efectivamente un partido de oposición independiente. Este rasgo era una fuente indudable de prestigio, pero probablemente también explique la debilidad intrínseca del partido cuyos momentos de fuerza están vinculados a alianzas circunstanciales con organizaciones empresariales o eclesiásticas. Al menos así ocurrió entre 1982 y 1988.

LA IRRUPCIÓN EMPRESARIAL EN ACCIÓN NACIONAL

La protesta antiestatista que dominaría la oposición al gobierno delamadridista, provino inicialmente de las poderosas organizaciones empresariales que se rebelaron en contra de la nacionalización bancaria. El Consejo Coordinador Empresarial, CCE, la Confederación de Cámaras de Comercio, Concanaco, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, entre otras, denunciaron desde septiembre de 1982 esta medida como una agresión a la iniciativa privada, cuyo objetivo era la implantación de un Estado totalitario o, cuando

menos, del socialismo. Posteriormente emprendieron una movilización cuyo tema era la libertad, y que consistió en la celebración de reuniones en las principales ciudades del país (Puebla, Torreón, Monterrey, León, Mérida, Culiacán) con el apoyo de las organizaciones locales de empresarios. En ellas se denunciaba la voluntad totalitaria del Estado, la subordinación del gobierno al socialismo internacional, y la relativa indefensión del individuo en un régimen de esta naturaleza.³⁶

Durante estos primeros meses de activismo político empresarial, el tono de la participación y de sus mensajes era tal que ponía en juego la estabilidad misma del régimen, en la medida en que denunciaba a las instituciones mismas y ya no a los funcionarios. La idea dominante era la necesidad de un cambio político radical para prevenir la arbitrariedad de las autoridades políticas. Los grupos que asumieron estas formas de protesta estaban ejerciendo una oposición desleal, cuyos efectos hubieran podido ser muy graves para la estabilidad política de no haberse transformado al integrarse a un partido establecido, el PAN, o a los diálogos y acercamientos que propuso incansablemente el gobierno de De la Madrid. Sin embargo, es muy probable que la conciencia de que eran altos los riesgos de una política de desestabilización en una situación de empobrecimiento generalizado, haya conducido a opciones moderadas.

No obstante, el objetivo primero de esta campaña era llevar hasta sectores distintos del gran empresariado el ultraje que había significado la nacionalización bancaria, encontrando puntos generales de coincidencia entre los intereses de ese grupo y otros.

Pese a que en México la iniciativa privada ha sido un factor central en el proyecto de desarrollo y en el crecimiento económico, los empresarios nunca han gozado de gran prestigio social. Su pobre reputación se explica en buena parte por la propia retórica revolucionaria que necesitaba de un adversario que le permitiera mantener su identidad popular, pero también —y de manera contradictoria— porque han gozado de un régimen de privilegio creado por el mismo Estado, y por el prolongado apoyo que habían brindado al autoritarismo político. La imagen social negativa del empresario como un individuo egoísta cuya única preocupación es el enriquecimiento personal, ha pesado sobre su capacidad para ejercer un liderazgo social ampliado, e incluso para promover alternativas políticas atractivas. Tanto así que desde 1957 algunas organizaciones empresariales crearon el Consejo Nacional de la

³⁶ Para un recuento de estas primeras reacciones ver: Miguel Abruch Linder, "La cruzada empresarial", *Nexos*, núm. 65, abril de 1983, pp. 25-29.

Publicidad, justamente para promover actividades que transmitieran una visión favorable del empresario, subrayando su función social y su papel dentro de la comunidad, y difundiendo sus principios de defensa de la propiedad privada y de los derechos individuales. Así, estos grupos pretendían contrarrestar la idea de que eran un sector aislado de la colectividad nacional y enemigo de las clases populares, cuya protección demandaba la intervención estatal.³⁷ Sin embargo, mientras se mantuvo el acuerdo tácito entre la élite política y la económica en cuanto a la especialización de funciones, según el cual a la primera le tocaba el mantenimiento de la estabilidad y a la segunda el crecimiento, la imagen social no fue una prioridad para el propio empresario.

No obstante, a raíz de las agudas diferencias que tuvieron con el gobierno del presidente López Portillo en materia de política económica, los empresarios decidieron defenderse más activamente de las denuncias gubernamentales, que les reprochaban su falta de solidaridad y que atribuían a la fuga de los grandes capitales la crisis financiera de 1982. La alianza entre el sector privado y el Estado recibió un impacto devastador en 1982 con la fuga de capitales y con la nacionalización de la banca, cuando el presidente López Portillo justificó aquella medida con las siguientes palabras:

Puedo afirmar que en unos cuantos, recientes años, ha sido un grupo de mexicanos, sean los que fueron, en uso —cierto es— de derechos y libertades pero encabezados, aconsejados y apoyados por los bancos privados, el que ha sacado más dinero del país, que los imperios que nos han explotado desde el principio de nuestra historia.³⁸

El discurso presidencial llegó a acusar a los banqueros, grupo selectísimo de la iniciativa privada mexicana, de asaltantes: “. . . Ya nos saquearon. . . No nos volverán a saquear.” Al recordar estas acusaciones la reacción empresarial resulta más que explicable. Sin embargo, los banqueros expropiados participaron muy poco en la ofensiva política que entonces emprendieron algunos grupos del sector privado.

³⁷ Uno de los líderes empresariales más activos, Emilio Goicoechea, por ejemplo, declaró en noviembre de 1982: “. . . es urgente participar, decidírnos a ser miembros activos para buscar líderes honestos, limpios y que nos gobiernen de manera más recta.” Cit. en Hernández Rodríguez, *op. cit.*, p. 268.

³⁸ José López Portillo, “Sexto Informe de Gobierno. 1 de septiembre de 1982”, en: Presidencia de la República-El Colegio de México, *Los Presidentes de México. Discursos Políticos. 1910-1988*, México, Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República con El Colegio de México, 1988, tomo V, pp. 194-213, p. 203.

Más todavía, uno de los más notables, Agustín Legorreta, antiguo presidente del Consejo del Banco Nacional de México, fue un interlocutor central del gobierno del presidente De la Madrid en la reconstitución de las relaciones entre el Estado y la iniciativa privada.

Los empresarios que optaron por abandonar las tácticas de los grupos de presión para comprometerse en el activismo político, se aferraron entonces al tema de la libertad para tender un puente interclasista. Ese mismo era el sentido de su insistente denuncia contra la corrupción gubernamental, que se convirtió en uno de los temas más poderosos de la movilización que organizaron, a través de la cual lograron crear una identificación moral entre ellos y muchos otros grupos sociales. El objetivo de los empresarios en ese momento era ampliar a otros medios el eco de su propia indignación, para involucrar en el ultraje al mayor número posible de mexicanos. Fortalecidos de esta manera podrían avanzar en el cambio político que perseguían y que consistía en limitar significativamente el intervencionismo estatal.

No era ésta la primera ocasión en que los empresarios intentaban insertar su causa particular dentro del marco de demandas más generales que podían atraer a grupos sociales más amplios. Tampoco recurrían por primera vez al antiautoritarismo para defender sus posiciones desde la perspectiva amplia de la defensa democrática y, más concretamente, de la reivindicación de la autonomía del individuo y de la sociedad frente a los supuestos abusos del Estado. Habían respondido de manera semejante ante diferentes actos de autoridad, por ejemplo, durante el cardenismo, o al inicio de los años sesenta, cuando las políticas moderadamente nacionalistas del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) despertaron los temores de clases medias y altas, presas del gran miedo que desató la Revolución cubana en el continente.³⁹

Sin embargo, mientras que en los casos arriba citados, la capacidad de influencia de la iniciativa privada era menor, o la oposición empresarial al gobierno perseguía sólo la modificación de determinadas políticas, en la década de los ochenta algunos empresarios prominentes, aunque no todos,⁴⁰ se mostraron convencidos de que era preciso construir una alternativa al régimen existente, y que tocaba a la iniciativa privada dirigir el cambio.

Aunque el terreno estaba en apariencia abonado para el éxito de la ofensiva política empresarial, en vista de los cambios sociales arriba

³⁹ Para la historia del periodo citado, desde esta perspectiva, ver Loaeza, *Clases medias y política en México*, *op. cit.*

⁴⁰ Ver María Amparo Casar, "Empresarios y democracia en México", en: Cordera Campos, Trejo Delarbre y Vega, *op. cit.* pp. 165-174.

apuntados, de la inconformidad más o menos generalizada que provocaba la crisis económica y del relativo debilitamiento del Estado, su pretendido liderazgo social era frágil. Las experiencias anteriores habían enseñado a los empresarios que su acción tendría un efecto limitado a menos de que encontraran la manera de dar continuidad a su esfuerzo político, sobre todo si su objetivo era mucho más ambicioso que influir en una determinada decisión. Los empresarios movilizados en la década de los ochenta perseguían algo más que la denuncia personalizada. Ahora parecían haber perdido la fe en un régimen que los había apoyado históricamente, pero que mantenía la capacidad de afectar de manera arbitraria sus intereses y de limitar su libertad de decisión. Así lo había demostrado López Portillo y antes el presidente Luis Echeverría (1970-1976), cuyo gobierno había estado marcado por frecuentes fricciones con el sector privado, que habían culminado con la expropiación de grandes propiedades de tierra en el norte del país. El propósito de la acción política empresarial al iniciarse los años ochenta era impedir que se repitiera lo ocurrido en esos dos sexenios, lo cual suponía un cambio que iba más allá del mero relevo presidencial. Por lo tanto, en esta ocasión sus instrumentos debían tener un alcance político mayor que la simple negociación de gabinete o más controlable que los posibles efectos de la fuga de capitales y la ausencia de inversión.

En este contexto el Partido Acción Nacional ofrecía a los empresarios movilizados una infraestructura de participación más adecuada que las cámaras industriales y de comercio. Allegarse la colaboración de Acción Nacional les ahorra los trabajos de formar un partido, pero también les brindaba el prestigio de una institución cuya trayectoria era limpiamente democrática, que contaba con un sólido aunque modesto capital político, construido durante casi medio siglo de ejercicio de una oposición leal.⁴¹ Por otro lado, al acogerse a ese partido los empresarios se protegían de aventurerismos, precaución importante para estos grupos que tenían escasa experiencia en materia de movilizaciones y en general de participación política. Al mismo tiempo, en la medida en que la ofensiva empresarial se inscribía dentro de las reglas establecidas del juego político, es decir, a través de partidos y elecciones, los empresarios movilizados no rompían radicalmente con el régimen. De esta manera, pasaron a ser una oposición semileal, que condiciona su apoyo al gobierno, sin renunciar del todo a los recursos

⁴¹ Ver: Soledad Loaeza, "El Partido Acción Nacional: la oposición leal en México", *Foro Internacional*, vol. XIV, núm. 3, enero-marzo de 1974, pp. 352-374.

de presión política que demostraron una extraordinaria eficacia durante estos años.

La colaboración entre Acción Nacional y los empresarios movilizados no era simplemente una táctica de corto plazo, sino que se fundaba en importantes convergencias ideológicas. La crítica al intervencionismo estatal, la defensa de los derechos individuales y de la vía electoral como único instrumento legítimo de cambio, han integrado la doctrina panista desde 1939, y han sido la columna vertebral de una auténtica identidad partidista. De todas formas, el sentido de urgencia que se había apoderado de los empresarios movilizados restaba importancia a las diferencias que hubieran podido surgir entre ellos y los cuadros tradicionales del partido, al menos en el plano de las ideas.

La diferencia entre el nuevo PAN y el viejo, era más de tácticas de lucha que de doctrina, de actitud antes que de ideas. Pero esto no significa que la distinción fuera superficial. Entre el partido de perdedores que estaba dispuesto a seguir luchando desde los principios de la doctrina por el triunfo de la democracia, y los empresarios exitosos acostumbrados a hacerse escuchar por el poder, decididos a ganar, existía la misma distancia que separa al pequeño ahorrador del gran apostador.

La irrupción de los empresarios movilizados en el PAN tuvo diferentes efectos sobre la organización. Algunas de las suposiciones tradicionales contra el intervencionismo estatal se radicalizaron: su estructura interna se debilitó por la necesidad de que el partido se acomodara a los recién llegados, se alteró el equilibrio regional del partido: las secciones del norte, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, le disputaron su influencia al Distrito Federal. Por otro lado, gracias a estos nuevos reclutas el PAN adquirió recursos para ampliar su presencia política y convertirse en un amplio frente interclasista, capaz de acoger las más diversas protestas, con un apoyo financiero sin precedentes —proveniente del sector privado— y con el respaldo de la influencia que pueden ejercer los empresarios locales en comunidades relativamente pequeñas. En este período Acción Nacional también pudo liberarse del cerco clasista gracias a que pudo asimilar la irritación de las diferentes regiones en contra de la centralización y la preponderancia de la capital de la República: la causa de la autonomía regional fue también la causa panista, pues se inscribía dentro de la resistencia general contra el gigantismo estatal.⁴²

Algunos de los cambios más importantes que se operaron dentro

⁴² Para algunos de estos cambios ver: Soledad Loaeza, "El PAN: de la oposición leal a la impaciencia electoral", en: Soledad Loaeza y Rafael Segovia, *La vida política mexicana en la crisis*, México, El Colegio de México, 1987, pp. 77-106, pp. 80-92.

del PAN, a raíz de la llegada de los empresarios alteraron el equilibrio interno del partido, también en términos de corrientes de opinión, entre las facciones que durante años se habían estado debatiendo entre la tendencia católica y la tendencia liberal, para favorecer a esta última. Este fenómeno ocurrió a pesar de que la Iglesia católica también participó activamente en estos años en la crítica antiestatista y en la movilización de los votantes por la oposición.

Históricamente Acción Nacional ha enfrentado el problema de la eficacia electoral. Mientras que para unos era éste un objetivo de largo plazo, y el partido debía ser antes que nada un agente de socialización democrática que formara una ciudadanía predicando con el ejemplo, para otros el partido debía guiarse casi exclusivamente por el interés de ganar votos, de cualquier manera y con cualquier tipo de electores. Esta última posición ganó terreno cuando los recursos humanos y financieros de los nuevos militantes panistas empezaron a fluir al partido. En esta alianza todos parecían ganar. Acción Nacional era la entrada de los empresarios a la acción política por la puerta de la legitimidad democrática. A cambio, el PAN adquiría la eficacia que le brindaba el apoyo económico de este nuevo grupo y de sus simpatizantes y amigos, y credibilidad como alternativa de gobierno, así no fuera más que local.

El neopanismo que —como señala Arturo Warman— nació en los medios que habían sido afectados por las expropiaciones de tierras decretadas por el presidente Echeverría en 1976, entendía la acción partidista antes que nada como vía de acceso al poder. Su inserción dentro del PAN fue posible gracias a que desde mediados de los años setenta se había agudizado en el interior del partido la lucha entre quienes defendían la identidad doctrinaria panista, y quienes por el contrario, con el fin de obtener el mayor número de votos posible, proponían una apertura al exterior fundada en la explotación del descontento y la protesta, vinieran de donde vinieran. Las tensiones entre estos grupos habían provocado una grave crisis en 1976, que impidió que el PAN participara en la campaña presidencial de ese año. No obstante, para 1982 la presencia empresarial dentro del partido ya era un hecho,⁴³ que se manifestó en elecciones locales en las que notables empresarios participaron como candidatos panistas.

La alianza con grupos empresariales aportó indudables ventajas para Acción Nacional. Entre otras ya señaladas, liderazgos enérgicos y atractivos que tenían una capacidad de comunicación con grupos populares ajena a la tradición panista.⁴⁴ Adalberto Rosas en Sonora,

⁴³ *Ibid.*, pp. 256-263.

⁴⁴ Ver, por ejemplo, Alberto Aziz Nassif, "Electoral practices and democracy in

Francisco Barrio en Chihuahua, y Manuel J. Clouthier en Sinaloa, lograron movilizar una amplia coalición de intereses que incluía desde el empresariado local hasta los jóvenes desempleados de las colonias populares.

Sin embargo, la misma diversidad era fuente de fragilidad, pues bastó que el gobierno delamadridista se propusiera restablecer la armonía entre el Estado y los empresarios, para que éstos abandonaran el apoyo a la oposición partidista. En este sentido no puede ignorarse el alcance político de la reforma estructural propuesta por el delamadridismo, tendente a contraer el intervencionismo estatal; asimismo habría que tomar en cuenta el efecto de reconciliación que tuvo decisiones como la creación de Ficorca, fondo de apoyo a la deuda externa del sector privado, o la liberalidad gubernamental ante el desarrollo de un poderoso sector financiero privado, a través del crecimiento de un complejo bursátil que llegó a convertirse en una banca paralela.

El apoyo de los grupos populares al PAN durante este periodo también fue de corto aliento. En primer lugar, porque, como lo señala Martin Lipset, el comportamiento político de estos grupos es más volátil que el de otros, en virtud de las presiones encontradas a que están sometidos, que reflejan las contradicciones entre sus intereses individuales y los de grupo.⁴⁵ En segundo lugar, tan pronto como apareció una opción que recogía las inquietudes de los grupos más pobres de la población, se desvaneció el atractivo de Acción Nacional como canal de expresión de esta protesta. La escisión cardenista del partido oficial, nacida en 1987 como una reivindicación de los intereses populares y ahora sí como protesta contra las políticas de estabilización, la disminución del intervencionismo estatal y la creciente desigualdad, pusieron fin al espejismo interclasista que la cruzada por la democracia electoral había logrado crear.

Con estos dos desprendimientos Acción Nacional enfrentó solo las elecciones presidenciales de 1988.

Chihuahua, 1985", en: Arturo Alvarado, *Electoral patterns and perspectives in Mexico*, La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, 1987, pp. 181-206; ver también: Rocío Guadarrama, "Elections in Sonora", en: *Ibid.*, pp. 43-80; y Loaeza, "The emergence and legitimization of the modern right. 1970-1988", *art. cit.*, pp. 360-363.

⁴⁵ Ver Lipset, *op. cit.*, pp. 204-215.

CONCLUSIONES

Entre 1982 y 1988 la derecha mexicana adquirió una precisión que nunca había tenido, gracias en buena medida al impacto de la nacionalización bancaria decretada el 1 de septiembre de 1982. Esta medida introdujo coherencia en una familia ideológica que convergía en el antiestatismo, pero difería en muchos otros aspectos. El frente más afectado por semejante decisión fue el de las relaciones entre el Estado y los empresarios. Sus tensiones y enfrentamientos crearon un clima favorable para que se formara una coalición de oposiciones que albergaba intereses diversos y grupos sociales también diferentes.

A diferencia de lo que en otros países se entiende como derecha, en México esta noción está coloreada por la experiencia revolucionaria, estatista y corporativa, que durante años condenó el pluralismo y la participación electoral como temas de la contrarrevolución, antipopular y antiigualitaria. Gracias a esta particularidad del espectro político mexicano, la derecha pudo sumarse a una cruzada por la democracia electoral y partidista, a partir de la cual pudo tender puentes interclasistas, que fueron posibles también por la ausencia de una alternativa a la izquierda, por lo menos hasta 1988. Esta asociación entre la derecha y la democracia fue posible también porque en México los grupos así identificados no han manifestado impulsos golpistas, y los pocos núcleos paramilitares o antiparlamentarios que han aparecido cercanos a estas posiciones, nunca han logrado legitimarse, probablemente en virtud del notable reformismo mexicano que ha permitido ampliar la participación política de manera gradual, por la vía partidista.

El poderoso impulso que recibió la cruzada por la democracia electoral en esos años se explica por dos tipos de razones: inmediatas, esto es, el fin de la armonía entre el Estado y los empresarios, y mediatas: la estratificación social que creó las condiciones para el afianzamiento de un partido para las clases altas y medias. Ambas razones favorecían al Partido Acción Nacional, que en esos años conoció un auge sin precedentes. Por otra parte, la legendaria estabilidad mexicana de más de cuarenta años también propiciaba el cambio político limitado que puede inducir una movilización electoral, que en ese momento estuvo escenificada en primer lugar por grupos de privilegio.

No obstante que la alianza empresarial ofreció al PAN recursos suficientes para acoger una movilización interclasista, el partido no pudo superar su carácter de organización de clase media cuyos valores e intereses se definen a partir de los intereses de grupos cuya identidad social determina su hostilidad frente al Estado y frente a los grupos populares. Aun así, y pese a que en la elección presidencial de julio de 1988

el PAN obtuvo resultados inferiores a sus expectativas, es indudable que la transición política mexicana siguió la vía electoral y partidista gracias a que el descontento y la inconformidad de los años ochenta pudieron primero expresarse por el canal que ofrecía Acción Nacional. Así, este partido fijó las líneas del cambio y contribuyó a estabilizar la incertidumbre que habían creado las crisis de 1982. En el proceso, Acción Nacional se fortaleció como canal de participación y también de acceso al poder de grupos de clase media. También se puso en evidencia el carácter instrumental del PAN, pero los reproches que esta función pudiera ganarle a ojos de unos tendrían que ser compensados por el hecho de que, gracias a este partido, la protesta de la derecha mexicana no partidista pudo pasar de la oposición desleal en que debutó en 1982 a la oposición semileal que es ahora.